

La campaña de 1983: los economistas radicales y los debates de política económica para la democracia

The 1983 Campaign: Radical Economists and Economic Policy Debates for Democracy

Ignacio Andrés Rossi

Ignacio Andrés Rossi es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Luján, magíster en Historia Contemporánea por la Universidad Nacional de General Sarmiento y becario doctoral por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

E-mail: ignacio.a.rossi@outlook.com

resumen

El trabajo analiza los diagnósticos y debates económicos durante la campaña de 1983 en Argentina, con el foco puesto en los economistas referentes de la Unión Cívica Radical (UCR). Para ello, se analizan los reportajes llevados a cabo oportunamente por el equipo de periodistas económicos del semanario Mercado en relación con otras fuentes periodísticas, estadísticas y testimoniales que permiten reconstruir la economía de la campaña durante la transición a la democracia. Los economistas radicales relevados fueron protagonistas centrales de la política económica del radicalismo en el gobierno, especialmente en la etapa del ministro Bernardo Grinspun (1983-1985), lo que permitió identificar de forma prematura muchas de las tensiones a las que se enfrentarían en diversos frentes (deuda externa, inflación, sistema financiero, entre otras). Se pudo observar en las discusiones abiertas por los referentes económicos del radicalismo que los temas prioritarios giraron en torno a la deuda externa, la reactivación, la inflación y el sistema financiero. También que, pese a las coincidencias entre ellos, hubo algunas distancias sobre cómo reactivar la economía, cómo inducir una baja de la inflación, las posibilidades reales de pagar la deuda externa o de qué forma manejar el sistema financiero que adelantaban las tensiones por venir.

palabras clave

deuda externa / inflación / sistema financiero / democracia

summary

This paper analyses the economic diagnoses and debates during the 1983 campaign in Argentina, focusing on leading economists of the Radical Civic Union (UCR). To do so, the reports carried out by the team of economic journalists of the weekly Mercado are analysed in relation to other journalistic sources, statistics and testimonials that allow us to reconstruct the economy of the campaign during the transition to democracy. The radical economists surveyed would be central protagonists of the economic policy of radicalism in the government, especially during the stage of Minister Bernardo Grinspun (1983-1985), which allowed the premature identification of many of the tensions that would be faced on various fronts (foreign debt, inflation, financial system, etc.). It was observed in the discussions opened by the economic leaders of radicalism that the priority issues were foreign debt, reactivation, inflation and the financial system. Despite the similarities, there were also some differences on issues that revolved around how to reactivate the economy, how to induce a reduction in inflation, the real possibilities of paying the external debt or how to manage the financial system, which foreshadowed the tensions to come.

keywords

external debt / inflation / financial system / democracy

Introducción

En los años ochenta, al momento de propiciar la transición a la democracia, la Multipartidaria¹ se convirtió en un actor central de la política argentina pese a ciertas ambivalencias que tuvo en sus inicios frente a la confrontación con los militares (Velázquez Ramírez, 2019: 58). Con la convocatoria radical y el aval del peronismo, el escenario político consolidado en el marco de la transición se estructuró en torno a los militares, los círculos civiles que los apoyaban y el polo político formado en la Multipartidaria. Precisamente, fue a partir de 1982 cuando se inició un ciclo ofensivo de movilizaciones que respondieron a su endurecimiento ante la llegada de Leopoldo Galtieri a la presidencia, hecho interpretado por parte de la clase política como un ciclo refundacional análogo al de Martínez de Hoz tras la llegada de Roberto Alemann (1981-1982) al área económica. Sin embargo, luego de la guerra de Malvinas y el ocaso económico, se diluyó cualquier posibilidad de negociación con los militares y se configuró la inminente salida electoral (Gambarotta, 2016). Cuando se levantó la veda política en julio de 1982, la Unión Cívica Radical (UCR) inició un proceso de reconfiguración interna donde el Movimiento de Renovación y Cambio liderado por Raúl Alfonsín, con el apoyo de sectores identificados con la izquierda del partido, como la Junta Coordinadora y Franja Morada, promovió el regreso del radicalismo a su carácter popular, disputando espacios al peronismo. El proceso de selección interna de candidatos radicales contó con las candidaturas de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese y Fernando de la Rúa en la Línea Nacional, este último asociado al liberalismo interno, quien había sido el vicepresidente de Ricardo Balbín en las segundas elecciones de 1973. La fractura se produjo cuando Alfonsín y De la Rúa fueron proclamados ganadores y este último se negó a retirar su candidatura. Pugliese, por su parte, terminaría apoyando al alfonsinismo, que posteriormente ganó las internas y sentó la hegemonía de su movimiento, al desplazar al histórico balbinismo (Baeza Belda, 2017; Velázquez Ramírez, 2019).

Hacia abril de 1983, en el marco de la campaña presidencial, el semanario *Mercado*² inició el ciclo de reportajes a referentes económicos de los partidos políticos argentinos llamado *La economía de los políticos*. Las entrevistas fueron realizadas por Gerardo López Alonso, Edgardo Silvetti y Rubén Mattone, periodistas especializados en economía con trayectoria en los principales medios del país, como *La Nación*, *El Cronista Comercial*, *La Prensa* y *Primera Plana*, entre otros. El ciclo era parte de la sección *Cuadernos de Mercado*, que se dedicaba a analizar diferentes temáticas de la coyuntura económica, como habían sido en el pasado la inflación, la deuda externa y el déficit fiscal, y recogía las opiniones de economistas. En esta ocasión, la preocupación trascendió la economía para jerarquizar el impacto político de la elección de 1983. De esta manera, se dio voz a los principales referentes económicos de la vida política argentina, entre los que pasaron Álvaro Alsogaray, Aldo Ferrer, Alfredo Gómez Morales, Bernardo Grinspun, Antonio Cafiero, junto con otros renombrados economistas. Sin embargo, el criterio de selección de los entrevistados no se limitó a los economistas más reconocidos, sino también que, con el objetivo de cubrir la vida política y electoral de aquel

entonces, también se dio voz a referentes de partidos como el Partido Demócrata Cristiano (Carlos Raúl Leyba), el Partido Federalista del Centro (Pablo Leclercq), o el Movimiento de Integración y Desarrollo (Octavio Frigerio), entre otros. Habitualmente, los reporteros de *Mercado* comenzaban con una serie de reflexiones sobre la coyuntura política y económica de Argentina y, a partir de allí, se disparaban preguntas. Sin embargo, los criterios y conceptos utilizados en cada entrevista dependían de la trayectoria de cada entrevistado. En los casos en los que se contaba con experiencia pasada en la función pública, como fue el de Gómez Morales, era habitual remitir a esas gestiones, pedir comparaciones, definir errores y proyectar hacia adelante en función de lo realizado. Otro criterio corriente fue pedir explicaciones sobre los diagnósticos de la economía en calidad partidaria y no individual, en un intento de cubrir el enfoque económico de los partidos y no, necesariamente, de los economistas. Por ello, el principal criterio de *Mercado* en todos los reportajes fue cubrir públicamente la política económica de cada formación partidaria en materia de inflación, endeudamiento, política cambiaria, fiscal y de crecimiento, por mencionar algunas de las más importantes.

En aquel entonces, los temas en discusión instalados desde la Multipartidaria³ permearon la campaña electoral del regreso a la democracia. Estos temas –la deuda externa, la promoción sectorial, el rol del Estado, el problema de la inflación (La Multipartidaria, 1982), entre otros– fueron jerarquizados por los partidos mayoritarios (Unión Cívica Radical y Partido Justicialista) en el marco de una contienda electoral fuertemente bipartidista. Así, en la inmediata transición se encontraban en el centro de los debates económicos una inflación que cerraría 1983 con una aceleración del 300% anual, una deuda externa de 45.000 millones de dólares, un déficit fiscal de más del 10% del PIB, un *stock* de fuga de capitales de más de 30.000 millones de dólares y una pérdida del salario real de alrededor del 30% entre 1975-1983, entre otras variables (Rapoport, 2020; Belini y Korol, 2021).

Como señalaron Belini y Rodríguez (2023), algunos trabajos aluden a las escasas definiciones y trascendencia de las discusiones económicas en aquellos años, lo que pudo haber derivado de la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, de la naturaleza de un nuevo régimen inflacionario, de la falta de renovación de los cuadros económicos, entre otros factores, luego de la experiencia de la dictadura (Gerchunoff y Llach, 1988; Heredia, 2006; Heymann, 1986). Este trabajo busca, en línea con el trabajo reciente de Belini y Rodríguez (2023), que analizó el debate económico en los partidos mayoritarios durante la campaña de 1983 a partir de las plataformas electorales, aportar al conocimiento de las discusiones económicas generadas en el seno de los partidos mayoritarios. Particularmente, se pone el foco en los economistas entrevistados por *Mercado* ligados a la UCR, que, a pocos meses de las elecciones debatieron la coyuntura económica de la transición. La dimensión de análisis jerarquizada son los diagnósticos, análisis y controversias de los economistas en relación con la coyuntura histórica.

El marco teórico adoptado es el de las ideas económicas y del pensamiento económico, que ha tenido un impulso reciente. Las ideas o ideologías políticas y eco-

nómicas cuentan con una larga tradición de estudios en Argentina (Zanatta, 1996; Romero, 2005; Terán, 2010; Camarero, 2012), aunque particularmente el trabajo también busca jerarquizar la relevancia de las ideas económicas y del pensamiento económico argentino. Se trata de un campo que todavía no fue lo suficientemente desarrollado en nuestro país, pero que viene registrando una serie de aportes recientes (Dvoskin, 2017; Caravaca y Espeche, 2021; Dvoskin *et al.*, 2024), como los abordajes que combinaron el análisis de las coyunturas históricas, las instituciones y la economía para situar a las ideas (Gómez, 2020; Rougier y Odisio, 2017). También se cuentan aquellos que pusieron en el centro a los economistas profesionales situados en sus ámbitos de discusión y participación en la vida pública (Neiburg y Plotkin, 2003; Rougier y Mason, 2020; Perissinotto, 2021; Ravier, 2021; Odisio y Rougier, 2022; Arana, 2024). Hablamos de aportes que reconocen las ideas económicas como parte de un paradigma, que, aunque no siempre articuladas, pueden tener una coherencia simbólica que las dota de consistencia e impacto en la vida pública (Hall, 1986; Schmidt, 2010). De esta manera, las ideas forman parte de un campo de razonamiento amplio con incidencia en la actuación y en la interpretación de la política económica, al tener presupuestos normativos que jerarquizan los problemas y las posibles soluciones de la economía nacional. De allí su relevancia para el estudio histórico de las coyunturas específicas de la economía nacional.

Bernardo Grinspun, Aldo Ferrer y García Vázquez

Entre los primeros entrevistados de la UCR estuvo Bernardo Grinspun, quien sería ministro de Economía del gobierno democrático. Se trataba de un experimentado militante y economista radical que asesoraba al Movimiento de Renovación y Cambio.⁴ Con las carreras de contador y licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Grinspun se especializó en el curso que ofrecía la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) en los años sesenta (Arana, 2024). Contó, como muchos otros futuros funcionarios del radicalismo, con una trayectoria destacada durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966) como director del Banco Central de la República Argentina (BCRA), secretario del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y de la secretaría de Comercio. Entonces, su principal planteo fue la cuestión de la deuda externa, que, como ponderó el radical, posibilitó una enorme fuga de capitales que afectó negativamente la inversión productiva. Esto se encontraba relacionado con la estimación que se manejaba de una expulsión del 10% de la mano de obra calificada estimada en 2 millones de personas. Respecto a la fuga de capitales, lo preocupante en el debate público era, en todo caso, el alto *stock* de capitales fugados que rondaba en aquellos años unos 30.000 millones de dólares (Basualdo y Kulfas, 2001) y que de algún modo tenía su correlato en una caída histórica de la inversión real a los niveles de los años setenta. Como puede verse en el Gráfico 1, mientras que la inversión real registraba una caída sostenida desde 1977, la inversión financiera evidenciaba un comportamiento más errático, con fuertes subidas y caídas que podrían asociarse al fuerte componente especulativo que el sector había adquirido desde los años

setenta (y que, de hecho, como puede verse más abajo en el Gráfico 2, había tenido un desempeño mejor que el resto de los sectores económicos).

Por otro lado, también aseguró que la deuda externa en sí misma no le preocupaba al radicalismo, ya que “para un país como la Argentina, si pudiera pagar los intereses de cada año nadie se animaría a pedirle la devolución de los créditos porque el negocio es prestar”.⁵ Grinspun aseguraba que era posible pagar entre 4.000 o 5.000 millones de dólares en concepto de intereses calculados entre 6 y 8% del PIB, dado que la fuga de capitales era mucho mayor. Por ello, mostró más preocupación por “las repercusiones internas, que por la capacidad que puede tener la Argentina para salir del problema”.⁶ Con un crecimiento del 5% anual, aseguraba, la Argentina podía reducir el peso de los intereses en el producto, lo cual sería compatible con una reducción gradual de la inflación al 150% en 1986.⁷

Imagen 1. De izquierda a derecha: Silvetti, López y Grinspun



Fuente: *Mercado*, 21 de abril de 1983, p. 3.

Otra variable crucial que le preocupaba al economista era la demanda global. Si bien priorizaba la reactivación, entendía que hacerlo vía salario real no tendría sustento a largo plazo. Por ello, apuntaba a la necesidad de reactivar la inversión, jerarquizando revertir los desequilibrios producidos durante la dictadura en torno a las transferencias regresivas de ingresos. Para esto, sería principal acordar un tipo de cambio “remunerativo para la producción y la exportación industrial y agropecuaria”.⁸ En otras palabras, se trataba de “trabajar” con un dólar sobrevaluado, incluso por encima de su valor teórico de equilibrio, en virtud de que permitiera producir un superávit de la balanza comercial e incentivar al sector agropecuario, pero también incentivar las inversiones industriales. En este orden, Grinspun habló de priorizar a la construcción, apuntando a la producción de 100 mil unidades de viviendas, aumentando los puestos de trabajo en más de 300 mil nóminas y generando un efecto multiplicador para reactivar.

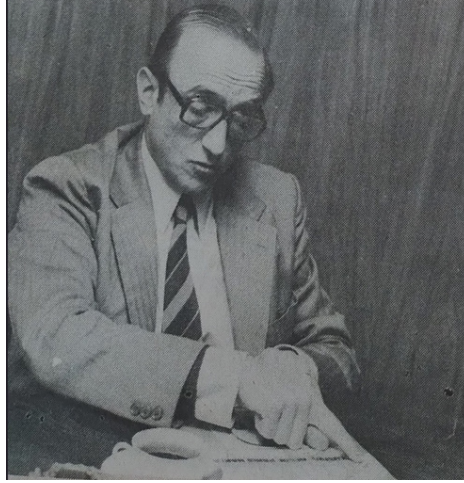
Grinspun remitía, así, a un sector altamente dinámico en el mercado interno y que había tenido un desempeño relevante previo al quiebre de la última dictadura. Como puede verse en el Gráfico 2, este sector tuvo un papel crucial desde el tercer gobierno peronista de 1973, seguido de un estancamiento durante la dictadura y una caída desde 1980. En términos relativos, el sector financiero fue el que mostró un desempeño más favorable, y si bien sectores importantes, como el agropecuario y la minería, se encontraban estancados entre 1980 y 1983, la caída de la construcción y la industria eran las más considerables.

Sin embargo, esta propuesta requería generar un cambio que, como explicó Grinspun, debía originarse en la dinámica financiera y tender a forzar el aumento del crédito bancario a la construcción y a otras actividades productivas. Sería este cambio de señales a los agentes financieros y productivos lo que permitiría, a su vez, reducir la inflación y mejorar la política de ingresos para asalariados y capital simultáneamente.⁹ La clave para lograr esto sería una política impositiva destinada a generar “un sistema de recompensas y castigos para tratar de orientar los capitales hacia los sectores productivos junto con una política crediticia que los aliente”.¹⁰ Adicionalmente, y en función de los postulados teóricos de Ferrer, se avanzaría hacia una economía “integrada y abierta”¹¹, bajo el argumento de que “la vamos a abrir porque vamos a trabajar con un mayor coeficiente de exportaciones y de importaciones; no queremos crecer sin exportaciones solamente para pagar la deuda externa, sino lograr una mejor composición de las exportaciones, más mercados, más productos”.¹²

El siguiente entrevistado fue el reconocido economista Aldo Ferrer, figura central del estructuralismo local egresado como contador público y doctor en Ciencias Económicas de la UBA, formado en Estados Unidos tras obtener una beca de las Naciones Unidas, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Alianza para el Progreso, también consultor de otros organismos, como la Organización de Estados Americanos (OEA). Afiliado a la UCR, en 1958 fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires tras la gobernación de Oscar Alende, en los sesenta fue candidato a diputado por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI)¹³ por la Capital Federal y durante los ochenta asesoró a la Multipartidaria. En primer lugar, el futuro presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) puso en el centro la importancia de la estabilidad política, factor que debía consolidarse con el restablecimiento del orden constitucional. Luego, la otra gran preocupación del economista fue la anomalía histórica en que se encontraba Argentina, en referencia a que las recetas clásicas para reducir el recalentamiento de la economía en períodos de crisis del balance de pagos con alta inflación podían no ser eficientes en las condiciones actuales. Como argumentó, “nunca en las circunstancias actuales coinciden simultáneamente todas las variables en un sentido negativo. Alta inflación, desequilibrio de balanza de pagos con desempleo y recursos ociosos”.¹⁴ Incluso, dado el contexto internacional desfavorable, con altas tasas de interés, medidas proteccionistas en los países centrales, subsidios económicos a productos que competían con los que Argentina exportaba y restricciones de liquidez financiera, se hacía evidente “la inviabilidad de un proyecto aperturista

que pretenda volver a vincular la economía argentina en un sistema mundial, esperando que desde afuera provengan los estímulos de la demanda y financieros”¹⁵ como se intentó con Martínez de Hoz.

Imagen 2. Aldo Ferrer



Fuente: *Mercado*, 12 de julio de 1983, p. 2.

Por estas razones, Ferrer planteó la necesidad de “volver a mirar hacia adentro”, en línea con su libro contemporáneo *Vivir con lo nuestro* (1983), de manera tal de jerarquizar la reactivación del aparato productivo sobre la base del aumento del salario y su absorción a partir de una baja de costos fijos y financieros que definirían una tasa de interés compatible con la rentabilidad de las empresas. También postuló la necesidad de trabajar con un tipo de cambio alto con retenciones o reintegros que dieran rentabilidad doble a los productores agropecuarios exportadores y a las industrias abastecedoras del mercado interno. En este esquema, creyó necesario un programa monetario para refinanciar los pasivos existentes, como el incremento inicial de los salarios bajo líneas de créditos especiales que eviten el traslado inicial a costos. No obstante, entendía que esto debía estar acompañado de una política muy moderada de expansión del sector público, definiendo solo tolerable un déficit del 4% del PIB para 1984. Además, consideró prioritaria una baja “drástica” de la tasa de inflación, ya que entendía que era imposible reactivar con aumentos superiores al 10% mensual, aunque no dio más precisiones sobre la estrategia antinflacionaria, sino que sugirió que quedaría atada a la reducción gradual del gasto público.¹⁶

Sobre la deuda externa, consideró que en las condiciones vigentes era inevitable que la Argentina cediera a las presiones de las políticas ortodoxas sugeridas por los acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que debería con-

centrarse en aprovechar “las ventajas que el país reúne: está prácticamente autoabastecido de energía, lo mismo ocurre con los alimentos, y tiene además, un bajo coeficiente global de importaciones; es un país que puede vivir con sus propios medios”.¹⁷ Si la Argentina se limitaba a sus recursos, consideraba Ferrer, podía negociar con los acreedores desde una posición firme al limitar sus exportaciones al pago de intereses en un 10% y recuperar la credibilidad internacional sobre la base de la legitimidad de la nueva democracia.¹⁸ Incluso, consideró la deuda externa un problema secundario¹⁹,

si somos capaces de reconstruir la democracia, recuperar la imagen internacional del país y de hacer una política interna coherente, no tendremos mayores dificultades en refinanciar la deuda externa, porque en definitiva va a tener que ser refinanciada de cualquier modo.²⁰

Para Ferrer, las autoridades políticas constitucionales debían definir un acuerdo social amplio de dos a tres años en materia de precios y salarios, política fiscal, monetaria y de ajuste externo que priorizara la reactivación, el redimensionamiento del gasto público, una reforma impositiva progresiva y el incentivo a la inversión, propuestas que prefirió no definir en ese momento preciso. Según entendía, este tipo de acuerdo era viable por la legitimidad del pensamiento nacional mayoritario surgido de la Multipartidaria.

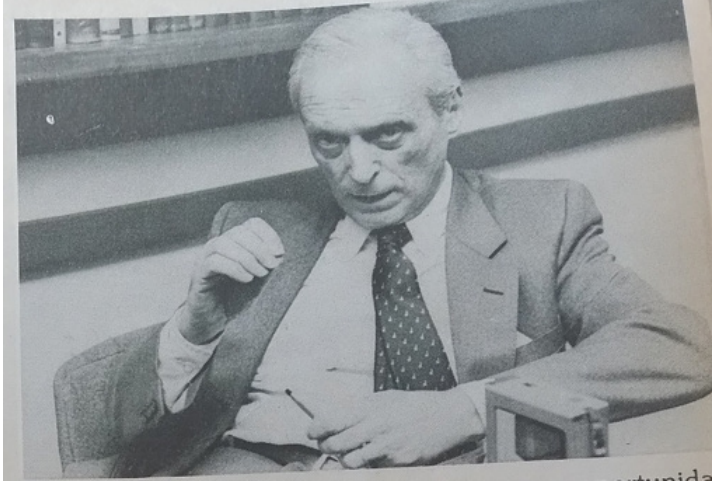
El 8 de septiembre de 1983 se entrevistó a Enrique García Vázquez, quien sería el presidente del BCRA entre 1983 y 1985. Contador y doctor en Economía por la UBA, García Vázquez era militante radical desde su actividad universitaria y se desempeñó en la función pública como jefe de investigaciones económicas del Banco de la Nación entre 1945 y 1946²¹, consejero financiero de la embajada argentina en Washington entre 1956 y 1957 y presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal entre 1962 y 1963. Su actividad más relevante fue durante el gobierno de Arturo Illia (1963-1966), donde ocupó la vicepresidencia del BCRA entre 1963 y 1965. En aquel entonces, formaba parte de la Secretaría de la Comisión Económica del Comité Nacional de la UCR. García Vázquez comenzó con un planteo en torno a la importancia de Keynes al alentar los recursos ociosos, aunque resaltó que

él [Keynes] pensaba en una economía con moneda. Precisamente, esto último hace que la receta keynesiana no sea aplicable en Argentina.²² Si se hace un análisis del aumento de la demanda global, veremos que los operadores económicos en nuestro país lo trasladan anticipadamente a los precios y entonces el proceso se agota de inmediato.²³

En virtud de ello, el radical consideraba que el keynesianismo en las actuales condiciones era impracticable, por lo que para reactivar el aparato productivo ocioso se debía aplicar una política de corto plazo destinada a incentivar la producción de mercancías desde el sector privado, seguido de una estrategia de apertura de la economía. Es decir, en primer lugar, era preciso aumentar la demanda interna sin efectos inflacionarios y, en segundo lugar, impulsar las exportaciones industriales,

muy particularmente en el área comercial latinoamericana. Una reactivación con orientación en los mercados internacionales en detrimento del mercado interno permitiría dirimir los efectos inflacionarios y favorecer al sector externo.

Imagen 3. Enrique García Vázquez



Fuente: *Mercado*, 8 de septiembre de 1983, p. 1.

No obstante, García Vázquez también jerarquizó la relevancia de iniciar un plan de viviendas, escuelas y construcciones de caminos en el interior del país, dado que el sector de la construcción podría aumentar la absorción de mano de obra desocupada y subocupada con un reducido efecto importador. En relación con la cuestión del sector asalariado, consideró que

el futuro gobierno constitucional deberá transformar la puja salvaje de los ingresos en un juego civilizado. Esto significa, además de un elemento básico para reducir la inflación, algo fundamentalmente necesario y es el establecimiento de algunas pautas para iniciar un aumento continuado del salario real.²⁴

En este sentido, el economista radical planteaba la posibilidad de poder aumentar, como máximo, el salario real en un 10% para 1984, aunque advirtió que sería irrealizable sin el estímulo a la inversión privada. El sector primario de dicha inversión, para García Vázquez, sería el campo, que debía impulsarse con una reducción al mínimo de los derechos de exportación bajo su condición de ser re-invertidos.

Con estos puntos delineados, el economista radical entendió que era posible reactivar la economía sin agravar el proceso inflacionario, a su vez que se evitaba reducir la demanda de forma violenta como única estrategia antiinflacionaria.

Sobre la problemática del déficit fiscal, García Vázquez abrió la posibilidad de una reducción gradual del 12% del PIB en 1983 al 5% en 1984, levantando la “bandera de la austeridad”. Especialmente, habló de la reducción de gastos en Defensa y Seguridad y de un equilibrio en el sistema previsional que pospusiera jubilaciones, achicara regímenes especiales y enfatizó en que “el país no resiste más jubilados juveniles”.²⁵ Cuando se le preguntó por la tensión entre el tipo de cambio y el salario, dada la prioridad al incentivo de las exportaciones que planteaba, el economista puso de relieve que debía estar cerca de su paridad teórica, en términos de lo primordial de las exportaciones, evitando por todos los medios una sobrevaloración del tipo de cambio, sin aclarar cómo se resolverían las tensiones.²⁶

Otro de los temas de especial relevancia giró en torno a la asumida reforma del sistema financiero. García Vázquez, en esta área, puso en el centro del problema la desmonetización de la economía, su impacto en la inexistencia de ahorro líquido y el aumento de la velocidad de circulación.²⁷ El hecho de que las entidades financieras se disputaran un ahorro líquido en pesos reducido agravaba la desmonetización y exigía una reducción de entidades financieras para esterilizar las altas tasas de interés y hacer más eficiente el sector luego de su exagerada expansión con Martínez de Hoz. Por ejemplo, en el Gráfico 3 puede apreciarse cómo los recursos monetarios atravesaban una contracción muy relevante desde 1979. Adicionalmente, tanto el M2 como el M1 nunca alcanzaron los niveles de 1974, en tanto seguían una tendencia similar a medida que la tasa de inflación se agravaba. Incluso, el deterioro era tal que superaba lo ocurrido en 1975 y 1976. En estas condiciones, el planteó remonetizar la economía mediante la reducción de la inflación vía achicamiento del sector financiero y consecuentemente de la tasa de interés.

La monetización, se deducía, se induciría con la estrategia de reactivación y reducción de la inflación. Por su parte, la segunda se haría mediante fusiones y liquidaciones combinadas con el establecimiento de un sistema de efectivo mínimo graduado.²⁸ Otros de los temas relevantes en este sentido fue la cuestión impositiva, donde muy brevemente habló del necesario aumento de la base impositiva y no de las tasas, mientras adicionalmente debía esperarse un aumento real de la recaudación vía reducción de la inflación, aumento de la productividad y una mayor campaña contra la evasión ilegal desde la Dirección General Impositiva (DGI).²⁹

Vicente Fernández, Jesús Rodríguez y Roque Carranza

El siguiente reportaje fue el 22 de septiembre de 1983, realizado a Vicente Lisardo Fernández, contador público nacional y Doctor en Ciencias Económicas por la UBA. Fernández contaba con un Master of Business Administration en la Universidad de Columbia (Nueva York), donde se especializó en comercio. Militante radical universitario desde los años cincuenta, pasó por la función pública en varias oportunidades durante el gobierno de Illia: en 1964 como asesor del Senado y en 1966 como asesor de gabinete del secretario de Industria y Comercio. Luego, también fue, en 1978, jefe del Departamento de Industria, Comercio y Producción

del Consejo Federal de Inversiones. Para el economista, lo primordial para la nueva gestión sería aumentar el consumo sobre la base de la recuperación salarial y la reactivación de las industrias paradas, para crear mayor ocupación. Fernández recuperaba de la gestión de Illia que

se aumentó significativamente el poder adquisitivo de la población. Como objetivo posterior se disminuyó la inflación y, además, se planificó todo en forma tal que se pudo cumplir con los compromisos internacionales, que si bien no eran tan grandes como ahora también eran fuertes.³⁰

Imagen 4. Vicente Lisardo Fernández



Fuente: *Mercado*, 22 de septiembre de 1983, p. 1.

Para avanzar en estos objetivos, sostenía que, primero, debía contarse con un aumento del poder adquisitivo del salario y, segundo, con un aumento de la producción, pero también imponiendo una “política de precios razonable en su totalidad”.³¹ Y este último punto se vinculaba en su análisis al problema del sistema financiero, donde se encontraba, según argumentaba, el costo más grande de la economía. Así, incluso puso de relieve la posibilidad de trabajar con tasas negativas para incentivar la producción y estimular las utilidades y la reinversión, aunque nuevamente jerarquizando la mayor capacidad de consumo. En definitiva, para controlar las tasas de interés se requería que el BCRA recobrará sus funciones de superintendencia y no solo de intermediación financiera.

En términos inflacionarios, Fernández volvió sobre la experiencia del gobierno de Illia, donde desde la Secretaría de Comercio se analizó la suba de precios mediante su fiscalización en un plazo de 30 días. Este sistema, argumentaba, permitía

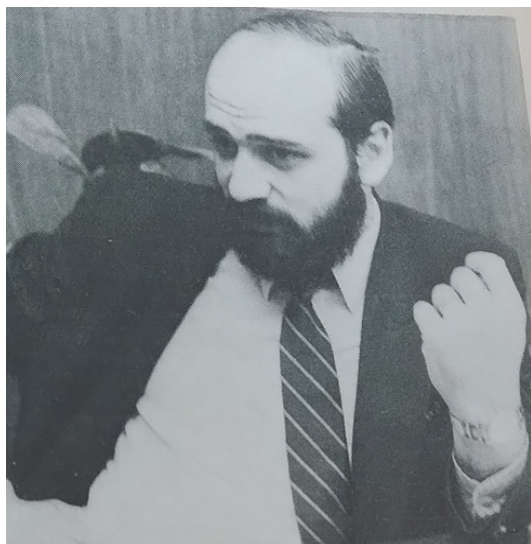
frenar las expectativas inflacionarias recostándose en los consumidores, los cuales debían actuar como fiscalizadores y priorizar una ética comercial solventada sobre una “ley de abastecimiento”, que eventualmente se recuperaría, destinada a cumplir requisitos elementales de calidad, cantidad y precios, aunque aclaró que un sistema de precios máximos debía ser solo temporal. Especialmente, porque la política de la Secretaría de Comercio debía estar enmarcada en un Plan de Desarrollo, como los formulados en el pasado por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), que pusiera en el centro al sector alimenticio para reactivar su capacidad productiva y satisfacer así las necesidades inmediatas de la población en el primer año de gobierno.

Sobre la política de ingresos, Fernández entendía que era necesario elevar el salario mínimo, vital y móvil al valor de una canasta de alimentos como política primaria, para luego frenar las expectativas inflacionarias. Mientras, paralelamente, se controlaría que las inversiones no fueran al canal financiero sino a la economía real. Esto era de vital importancia, porque, como puede verse en el Gráfico 4, el salario mínimo y los ingresos medios se encontraban muy por debajo de los niveles máximos alcanzados en 1974.

Ante los cuestionamientos de los reporteros de *Mercado* a la necesidad de aumentar la oferta y la crítica a la estrategia keynesiana, Fernández replicó que primero debía aumentar la demanda y paralelamente la oferta de bienes: “la demanda es necesaria para que haya más gente en el sistema y menor ingreso real. Eso hará que se incremente la oferta. Y si no, hay que tomar medidas para su incremento”.³² Esto, en el razonamiento de Fernández significaba la disminución de la inflación vía achicamiento de costos financieros y no tenía por qué incentivar una inflación de demanda. Especialmente si se impulsaba la inversión en la economía real y la renegociación de la deuda externa en condiciones favorables, lo que ponía en el centro un cambio relevante de las expectativas de los agentes económicos.

El 13 de octubre de 1983 llegó la entrevista a Jesús Rodríguez, economista de la UCR egresado de la UBA y miembro significativo del partido radical. Entonces presidente del Comité Capital de la Juventud Radical y candidato a diputado nacional por la Capital Federal, Rodríguez inició su militancia en Franja Morada desde sus días de estudiante universitario para luego integrarse a la Comisión Económica del partido. En esos años, Rodríguez formaba parte de la Comisión Directiva del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal y de la Comisión de Estudios Económicos de la misma institución. Además, era parte de la Fundación Eugenio Blanco bajo la dirección de Roque Carranza, y en estos años sería dirigente de la Junta Coordinadora Nacional —de la cual en 1984 sería elegido presidente—, diputado por la Capital Federal entre 1983 y 1987 y ministro de Economía durante la hiperinflación de 1989.

Imagen 5. Jesús Rodríguez



Fuente: *Mercado*, 22 de septiembre de 1983, p. 2.

Durante el reportaje, Rodríguez no tuvo reparos en calificar la situación económica de “desastrosa”, en referencia a variables que iban desde la deuda externa, los índices de precios y los salarios reales hasta “el esquema de funcionamiento económico”.³³ En datos concretos, Rodríguez ponderó una inflación del 400% anual, un déficit de tesorería del 12% del PIB, la necesidad de refinanciar alrededor de 13.000 millones de dólares en vencimientos de deuda externa, un bajo índice de monetización de la economía que se redujo del 20% al 10% del PIB medido en M2 y salarios un 35% inferiores a 1975 (ver Gráficos 3 y 4 en Anexo). Aunque los reporteros de *Mercado* interrogaron si era viable un programa de reactivación sustentado en la demanda global en esas condiciones, el economista radical aseguró que, si bien la inflación era la prioridad número uno del partido, “tenemos muy en claro que no puede intentarse una estrategia antiinflacionaria basada en recetas recesivas”.³⁴ Esto último, se expresaba en función de que la vulnerable situación social lo impedía, lo que sin embargo no significaba que se podría practicar un programa estructuralista que apuntara a solucionar los “estrangulamientos” de la economía. Por el contrario, Rodríguez puso de relieve la importancia de “quebrar las expectativas inflacionarias” atenuando la puja distributiva, la cual “a nuestro juicio, es el motor más importante para generar inflación”.³⁵

Para poder avanzar en un programa que atenuara el conflicto en esta dimensión, sería necesario una concertación amplia³⁶, pero también se requería un control sobre el “desborde monetario y fiscal”, lo que significaba reformular el presu-

puesto público –que auguraba la ya consensuada reducción de gastos en Defensa y Seguridad–, priorizar la reactivación de la economía y atender los problemas más urgentes en materia de educación, vivienda y salud. Ahora, para alcanzar este último objetivo se necesitaría, aseguraba, una reforma tributaria que aumentara los impuestos directos por sobre los indirectos y posibilitara la reactivación, la remonetización de la economía y la baja de la inflación de forma moderada. En este sentido, Rodríguez habló de privilegiar impuestos a las ganancias, al capital y al patrimonio con la contracara de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos seleccionados como los alimentos. Ello, según argumentó, permitiría reducir los niveles de inflación evitando estrategias a su juicio espurias, como un blanqueo de capitales.³⁷ Uno de los puntos más conflictivos era, sin dudas, la arquitectura institucional que tendría la concertación de la que hablaba Rodríguez, sin la cual no se podrían reducir las expectativas inflacionarias. En virtud de ello, el economista destacó la posibilidad de poner en marcha un Consejo Consultivo del Poder Ejecutivo donde participasen representantes de todos los partidos políticos, una comisión al interior del Congreso o bien algo más descentralizado al interior de los ministerios, a partir de la convocatoria a entidades representativas.

Si estos pilares se lograban y la economía se reactivaba con una moderada inflación, Rodríguez consideraba que las inversiones aumentarían como no pudo lograrse, cuestionaba, con los amplios beneficios otorgados a los capitales extranjeros con la ley de inversiones extranjeras de la dictadura³⁸, que “no consiguió producir inversiones debido a la falta de un mercado capaz de atraer a los inversionistas”.³⁹ Ampliando los mercados y posibilitando la reactivación de la inversión orientada a la economía real se lograría, entendía, que las divisas en el exterior de los residentes argentinos se reinviertan en el país iniciando “cien años de prosperidad y paz en provecho de la Argentina”.⁴⁰ Sin embargo, dentro del esquema económico que planteaba Rodríguez, *Mercado* indagó en la necesidad de una reforma financiera. Al respecto, el economista sostuvo que el sector tenía un poder político relevante, no tanto medido en términos de su incidencia en el PIB, pero sí en otras variables problemáticas como la concentración, el excesivo “sucursalismo” de unas 5.000 entidades y el bajo grado de monetización de la economía. Si bien en 1982 el aporte al producto del sector financiero no era tan relevante como otros sectores (servicios sociales, comercio, industria, entre otros), desde 1970 el sector experimentó un crecimiento relativo notable, que sobrepasaba a sectores como la construcción, minas y canteras, electricidad, gas y agua, y también ganando peso frente a otros. En este sentido, el sector financiero destacaba por su variación porcentual relativa en el período considerado, más que por su peso relativo en términos absolutos en el PBI. El producto financiero había variado un 138,8% entre 1970 y 1982, por encima de electricidad, gas y agua (79,6%), del sector minero (55,4%), la construcción (51,2%), transporte y comunicaciones (49,9%), servicios comunitarios (23,1%) y agricultura (13,4%). Por su parte, comercio e industria resultaron negativos (-28,4% y -37,1%).

Estas cuestiones, argumentaba, provocaban un aumento sideral del *spread* bancario, que impedía una reactivación con bajas tasas de interés. En virtud de ello,

su propuesta era avanzar en un esquema de tasas activas y pasivas neutras que permitiera mediar la rentabilidad de la inversión e indujera una menor nominalidad y consecuentemente inflación. Así, sostenía, se podría volver a jerarquizar la banca pública en su rol de fomento sectorial y “reforzar el poder de policía del Banco Central”.⁴¹ Sin embargo, respecto de esto último, aclaró que no se induciría una nacionalización de los depósitos, pero sí que debía concebirse el sistema bancario como un servicio público, lo que en definitiva significaba utilizar el instrumento discrecional de los redescuentos y encajes fraccionarios.

Otros de los temas relevantes que puso en debate Rodríguez giró en torno al comercio exterior. Habló de la necesidad de revitalizar las Juntas reguladoras para retribuir a los productores con precios justos y controlar el suministro de divisas, y evitar que el poder de *lobby* de los grandes comercializadoras derive en apropiaciones injustificadas de los ingresos. Adicionalmente, subrayó la necesidad de recuperar las exportaciones industriales a sus niveles máximos del 50% de la demanda agregada desde el 10% que representaban en aquel entonces. Ello inducía una integración intrarrama industrial con Brasil, sobre la base de incentivos fiscales a la exportación y mecanismos de reembolsos y reintegros. Además, considerando la capacidad ociosa que estimaba Rodríguez entonces⁴², el aumento de las exportaciones sería compatible con el aumento del consumo interno. Por otro lado, sobre la deuda externa, aclaró que Argentina “pagará la deuda legítima”⁴³, es decir, sugirió la investigación para detectar delitos económicos que, de alguna manera, estimó en unos 6.000 millones de dólares. Así, Rodríguez refirió muy explícitamente a la cuestión de los seguros de cambio y el subsidio que implicó para determinadas empresas⁴⁴, como un modo de revalorizar la iniciativa de Alfonsín de exigir la información pública necesaria que, hasta el momento, acusaba, “nunca nadie se dignó a decir cuál era la realidad de las cosas”.⁴⁵

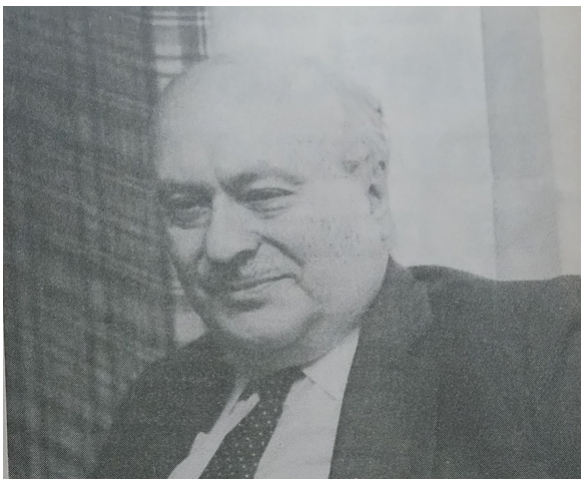
Sin embargo, el economista radical aclaró que, para poder llegar a acuerdos viables en el frente de la deuda externa, debían solucionarse determinados factores que agravaban la dependencia argentina del exterior, como i) que los países centrales redujeran las barreras proteccionistas y que dejaran de subsidiar a sus sectores agropecuarios restando mercados a los países en desarrollo como lo hacían Estados Unidos y Francia; ii) que en el sistema financiero internacional se planteara una inmediata reducción de las tasas de interés internacionales; iii) que organismos como el FMI comprendan que las recetas ortodoxas no eran efectivas en virtud de que el sistema financiero internacional se encontraba en crisis; y iv) que los países deudores avanzaran en una negociación necesariamente política de la deuda, limitando los pagos a la capacidad de las economías.⁴⁶

El 27 de octubre de 1983, a pocos días de la asunción del gobierno democrático, *Mercado* entrevistó a Roque Carranza, futuro ministro de Obras y Servicios Públicos entre 1983 y 1985 y ministro de Defensa de la Nación entre 1985 y 1986, poco antes de fallecer en febrero de aquel año. El histórico radical era parte del equipo de economistas partidarios, ingeniero industrial egresado de la UBA y, como muchos, exfuncionario de Illia, como secretario del CONADE. También fue miembro del Comité de Planificación del Desarrollo de las Nacionales Unidas entre 1966 y

1968, y a nivel nacional formaba parte de la Junta Coordinadora Nacional desde los años setenta y del Movimiento de Renovación y Cambio de Alfonsín. Entonces, Carranza aseguraba que el principal problema de la economía era la recesión enmarcada en el ciclo internacional, razón por la cual la Argentina enfrentaba dificultades para colocar saldos exportables en el exterior con gravosos impactos en la recuperación. Si bien planteaba que Argentina estaba en mejores condiciones que otros países en desarrollo, porque mantenía un saldo comercial positivo, tenía serias dudas de poder encarar una renegociación favorable de la deuda con las altas tasas de interés internacionales vigentes. Respecto de la postergación de pagos, Carranza entendió que los acreedores estaban aceptando postergar las amortizaciones, lo que eventualmente podría beneficiar a Argentina.⁴⁷

Cuando se discutió sobre la inflación, Carranza puso de relieve que la cuestión de los acuerdos de precios estaba desprestigiada luego de la experiencia de José Gelbard⁴⁸, aunque entendía que debía existir un nivel mínimo de acuerdo. Sin embargo, aseguraba que, a diferencia del peronismo, no debía avanzarse en un acuerdo corporativo entre partidos, empresarios y sindicatos, sino en acuerdos sociales y sectoriales que permitan cubrir diferentes agendas prioritarias. Para esto, se refirió a la necesidad de un acuerdo en el ámbito del Congreso, dado que se trataría de una nueva instancia de representación política legítima que debía promoverse. Así, esto debía estar al servicio, según concebía el referente radical, de privilegiar un programa de reactivación sobre la base del aumento del consumo, aunque no solo por el lado del aumento de los salarios, dado que “sabemos que un aumento de los salarios implica luego un aumento de los precios”.⁴⁹ Entonces, como contrapartida, habría que tener una política de ocupación que recompusiera el mercado de trabajo y aprovechara los factores ociosos, atendiendo las demandas acumuladas.

Imagen 6. Roque Carranza



Fuente: *Mercado*, 27 de octubre de 1983, p. 3.

Otro de los puntos que priorizó Carranza fue en torno al tipo de cambio, al sugerir que debía ser alto, pero debía mantener tipos diferenciales, tanto en virtud de evitar una subida que impactara eventualmente en los precios internos de forma brusca como de incentivar a los sectores preferenciales. La tasa de interés, según consideraba, debía ser nula, en tanto concebía que la inflación bajaría si se eliminaban las tasas reales positivas y se reactivaba la economía. De este modo, finalizaría el período de tasas positivas inaugurado desde 1976, como puede verse en el Gráfico 6.

Estos dos factores de política económica, para el radical, impulsarían una reducción de la tasa de inflación sobre la reversión de las expectativas inflacionarias, restando importancia a la reducción del déficit fiscal, y asegurando que la Argentina podía crecer en estas condiciones a 5% anual.⁵⁰

Otro de los temas surgidos fue la planificación sectorial para sostener las bases de dicho crecimiento. Aquí Carranza entendió que un eventual Plan Nacional de Desarrollo como los del CONADE, si bien eran una experiencia valiosa luego de las políticas de Martínez de Hoz, debía ponderar el “hacer una estructura nueva total y un cambio total de gente. Todo el sistema de planeamiento está lleno de personas que se le presentan como doctores o ingenieros y son militares retirados”.⁵¹ En este sentido, sugería que era conflictiva la permanencia de militares o exmilitares en áreas claves del gobierno.⁵² También aludió al problema de los ingresos del Estado, que, según explicó, era un debate que debía trascender la reducción de su déficit, y donde apuntó al congelamiento tarifario por seis meses decidido por el ministro de Economía Roberto Alemann. Esta política, para Carranza, era especialmente perjudicial, dado que condujo a uno de los mayores atrasos de la historia, por lo que habría que “trabajar sobre la estructura de las tarifas. Para que esto tenga menor impacto en los sectores de menor poder adquisitivo. O sea, que no subir todo para arriba sino habrá que pensar en subir una tarifa más que otra”.⁵³ Otra de las cuestiones debatidas giró en torno a la estructura de las importaciones, donde Carranza aseguró que se debía mantener un férreo control y que, desde 1984, “habrá que ajustarse los cinturones” para administrar las divisas de la forma más eficiente y evaluar cómo hacerla efectiva a la evolución de las negociaciones de la deuda interna.

Reflexiones finales

La mayoría de los temas debatidos en el marco de la campaña electoral de 1983 por los economistas radicales fueron coincidentes: la deuda externa, la reactivación, la alta inflación, el sistema financiero y los límites impuestos por las condiciones internacionales. En particular, la mayoría coincidía en que había que reactivar la economía (Ferrer, Carranza, Rodríguez, Fernández), pero también se destacaron las posturas de Ferrer y Rodríguez que pusieron en el centro de las posibilidades del futuro gobierno la importancia basal de un acuerdo político amplio. Si bien la reactivación de la economía era un consenso que venía desde la Multipartidaria, había algunas reservas respecto de los efectos de las políticas keynesianas en un contexto hiperinflacionario, como planteó García

Vázquez. Quizá el planteo más acabado, en este sentido, fue el de Ferrer, quien supeditó la baja inflación a la reducción del déficit y la moderación de la puja distributiva, aspectos que también retomó Fernández. Sobre este último punto, si bien pareció haber cierto optimismo de materializar el consenso y limitar las demandas en un acuerdo social amplio, posiblemente dado el amplio rechazo que cosechó en la sociedad la política económica de la dictadura, pronto se sabía que era una de las cuestiones más conflictivas. Otro de los puntos en que hubo coincidencias parciales fue sobre la deuda externa, particularmente sobre la necesidad de limitar los pagos a la capacidad de recuperación de la economía, como previeron Ferrer y Carranza, aunque otros fueron más pesimistas al respecto y jerarquizaron el cambio de las condiciones internacionales en materia de las tasas de interés, del proteccionismo comercial, entre otras dimensiones. Por último, no menos importante fue la coincidencia en torno a revertir el papel especulativo y cortoplacista que había adquirido el sistema financiero, aunque la estrategia a la que aludió la mayoría al respecto se limitó a bregar por una baja de las tasas de interés, una depuración institucional y la recuperación de la superintendencia del BCRA, que, como previeron en los casos de mayor optimismo, como Rodríguez, sería suficiente para atraer los capitales fugados.

En el orden de las diferencias, que no fueron pocas, se puede mencionar la diferencia en el planteo de la reactivación entre Grinspun y García Vázquez. El primero jerarquizó el rol de sectores dinámicos en el mercado interno, el empleo público y el rol del Estado, como la construcción, mientras que, para el segundo, las condiciones para políticas keynesianas no estaban dadas. García Vázquez, por su parte, desconfiaba de los estímulos fiscales a la economía y prefirió jerarquizar una reactivación vía el sector privado. Sin embargo, la imposibilidad de un ajuste recesivo en las condiciones actuales era parte del pensamiento mayoritario.

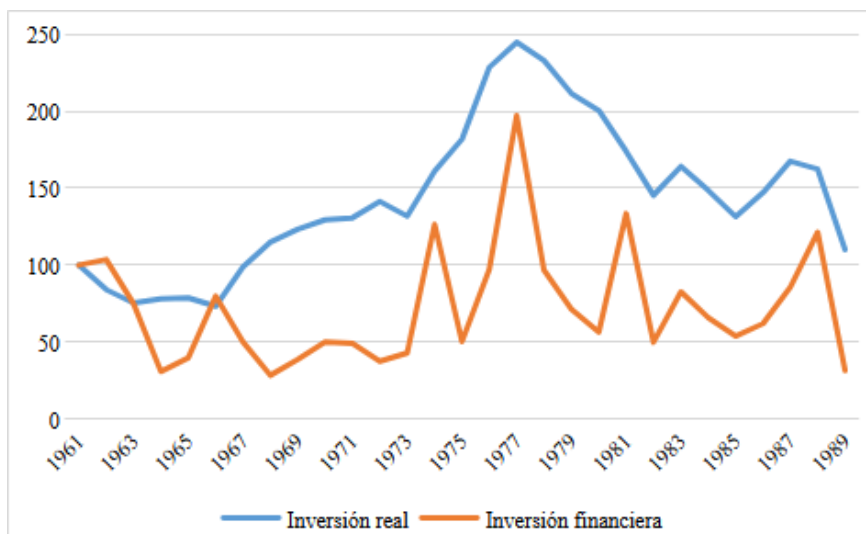
Otras de las diferencias sustantivas fueron en materia de endeudamiento externo, en donde Rodríguez destacó por el resto de los economistas al instalar el debate sobre la ilegitimidad de la deuda externa. De esta forma, en tanto sugirió que debía investigarse el proceso de endeudamiento, se posicionó como el único entrevistado que priorizó esa radical postura por revisar lo realizado por el régimen militar, mientras el resto, por su parte, no parecía cuestionar las obligaciones contraídas y transferidas al Estado nacional. Otro de los puntos en donde hubo diferencias fue en materia de inflación, que no todos pusieron en el centro. Por ejemplo, para Grinspun, Carranza y Fernández se podían reducir de forma progresiva los niveles inflacionarios, sobre todo si se contaba con acuerdos de precios y de salarios, mientras Ferrer adicionó una estrategia financiera para reducir el aumento de costos derivados del aumento de los salarios que prácticamente todos consideraban inevitable. Así, la tensión principal era distributiva, porque se sabía que los salarios debían recuperar poder de compra, pero a la vez que los niveles de inflación altos respecto de 1975 podrían un límite. Por ello, aunque la mayoría puso el centro la cuestión de reducir las expectativas inflacionarias, las diferencias afloraron en concepto de si sería la reducción del déficit

fiscal, el acuerdo de precios, la mejora de las condiciones internacionales y la renegociación de la deuda externa, entre otras, el principal factor que permitiría reactivar la economía y bajar los precios a la vez.

Si bien el trabajo se limitó a analizar a los economistas del radicalismo con mayor trascendencia en el partido, muchos de los cuales serían parte central de la gestión del gobierno, pueden señalarse algunas tensiones que recorren la coyuntura política y económica del período de transición democrática. En primer lugar, destaca la particularidad del quiebre económico que significó la dictadura militar de 1976 en el funcionamiento de la economía, el cual se manifestaba, principalmente, en niveles de inflación desconocidos en el siglo XX. Así, los efectos sobre la apertura comercial en la estructura industrial, en el funcionamiento del sistema financiero tras la reforma de 1977 y la incidencia del endeudamiento externo impactaron muy particularmente en el diagnóstico de los economistas. Esto se hizo evidente en las controversias en torno a cómo reactivar la economía, recomponer el salario real y recuperar la actividad industrial –principal sector afectado– con niveles de inflación del 300% anual. También fue relevante la falta de definiciones sobre el sistema financiero, dado que solo se aludió a la importancia de reducir las tasas de interés y a un mayor control por parte del BCRA. Adicionalmente, los diagnósticos sobre el sector externo mostraron una subestimación sobre el poder de negociación de los acreedores, donde solo se consideró la importancia de negociar un acuerdo con el FMI de forma rápida. Las transformaciones que la última dictadura provocó en la economía argentina, y que marcarían los límites de la política económica durante el gobierno de Alfonsín, muestran que los diagnósticos y las propuestas económicas durante la transición democrática estuvieron atravesadas por la comprensión de fenómenos nuevos, disruptivos y coyunturales, que limitaron la estrategia económica del próximo gobierno. Las diferencias económicas en los economistas ligados al radicalismo muestran, si bien algunos postulados eran acertados, que por los motivos señalados no había un programa consistente hacia el interior de la UCR.

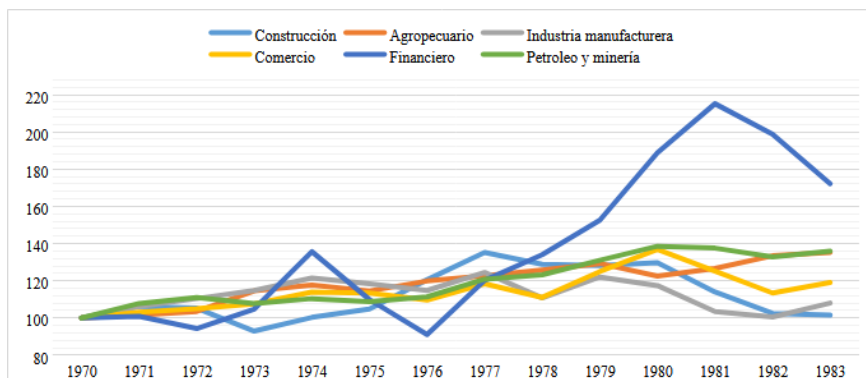
Anexo

Gráfico 1. Inversión real y financiera, 1961-1989 (1961 base=100)



Fuente: Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Hacienda. Sector público argentino no financiero. Cuenta ahorro-inversión-financiamiento, 1961-2004. Argentina, diciembre de 2004, pp. 10-16.

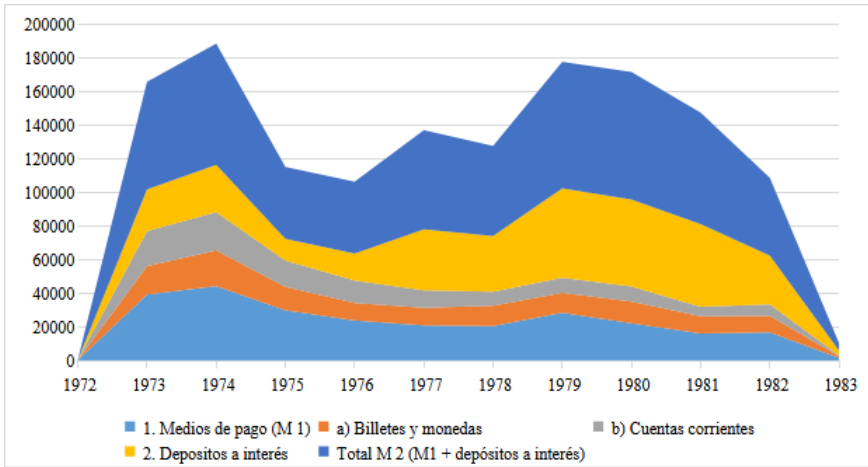
Gráfico 2. Evolución de sectores económicos seleccionados, 1970=base 100*



*Base original en millones de pesos constantes de 2004

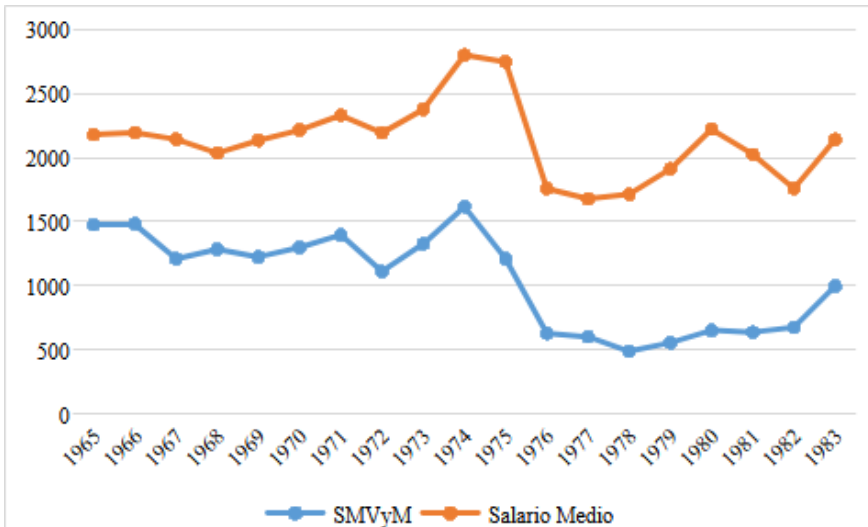
Fuente: FUNDAR

Gráfico 3. Distribución de los recursos monetarios en términos reales, 1974-1983



Fuente: memorias del BCRA, 1975-1983.

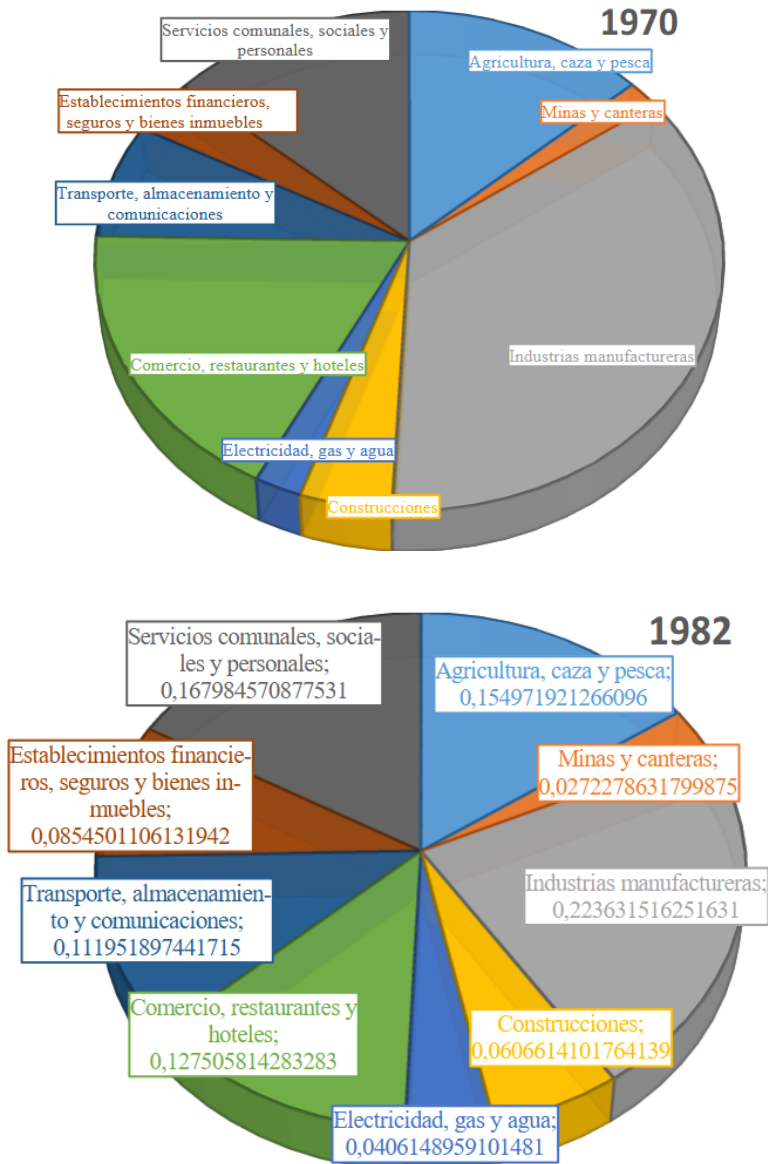
Gráfico 4. Salario mínimo, vital y móvil* y salario medio en términos reales (en australes de mayo de 1988), 1965-1983.



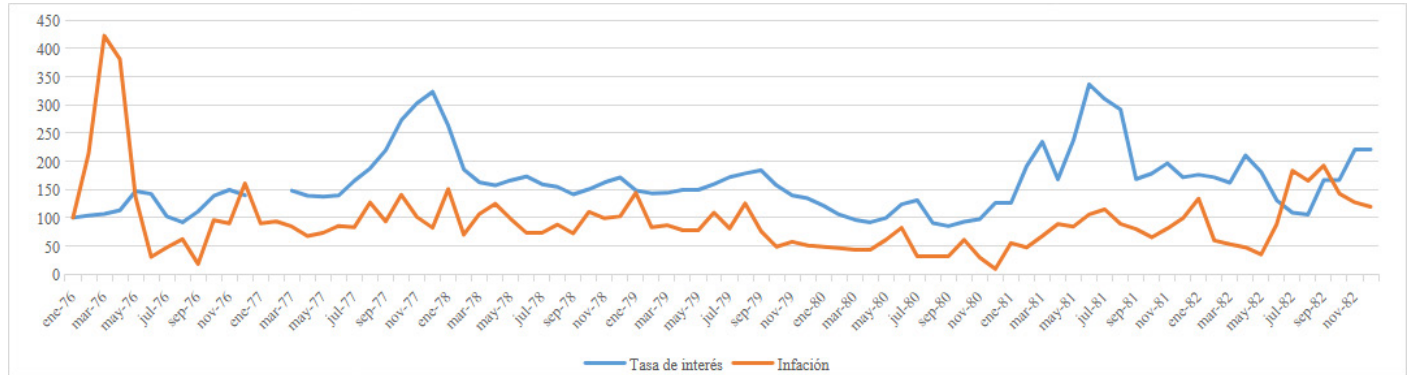
*Establecido en 1964 (Ley 16.459) como remuneración que posibilita a una familia la alimentación adecuada, vivienda digna, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones, esparcimiento, seguro y previsión.

Fuente: El salario mínimo en Argentina: alcances y evolución (1964-1988). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Proyecto Gobierno Argentino. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo, 1988, p. 30.

Gráfico 5. PBI sectorial a costo de factores en porcentajes, año 1970 y 1982

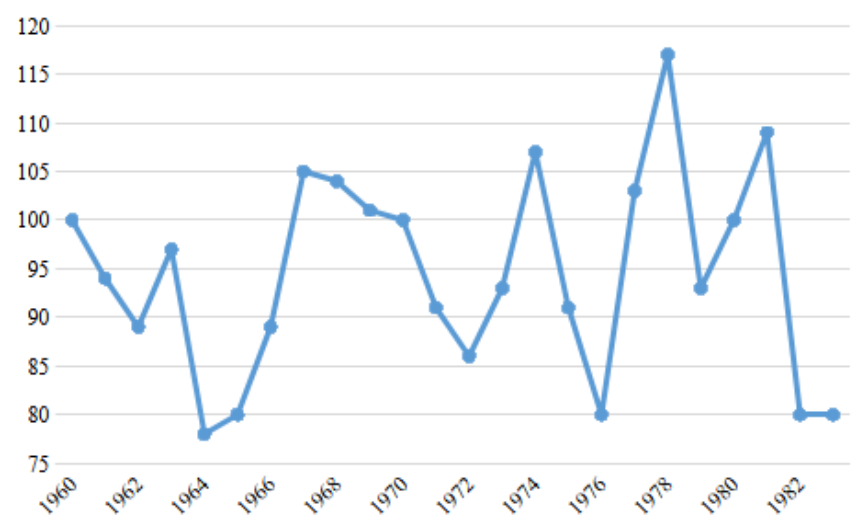


Fuente: Fide. Coyuntura y Desarrollo. Anexo Estadístico XVI, diciembre de 1983, p. 4.

Gráfico 6. Inflación y tasa de interés, 1976-1982 (Índice 1976=100)

Fuente: Memorias anuales del BCRA, 1976-1983.

Gráfico 7. Evolución de las tarifas en términos corrientes (nivel general). Índice base 1960=100



Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de (Cont, Navajas, Pizzi y Porto, 2020).

Referencias

1. Formación política originada en 1981 por los partidos Justicialista, UCR, Intransigente, Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo encargada de emprender negociaciones con el gobierno militar. Velázquez Ramírez identificó diferentes posturas tanto en el interior de la UCR como del PJ, que se distinguían según su postura más acuerdista con los militares o bien por intentar tomar la iniciativa de la apertura política de forma más frontal (2019: 45-48).
2. El medio nació en 1969 de la mano de importantes periodistas, como José Delgado, Mario Sekiguchi, Raúl Sarmiento o Alberto Borrini, y asesores, como Rafael Olarra Jiménez, Ángel Alberto Solá o Carlos García Martínez. Estos actores, con antecedentes en los principales medios periodísticos de vanguardia del siglo XX, como *Correo de la Tarde*, *El Cronista Comercial*, *La Nación*, *La Prensa*, *Primera Planta* e incluso revistas como *Humor Registrado*, *Patoruzú*, *Siete Días*, *Gente* y *Satiricón*, le dieron a *Mercado* una fuerte impronta profesional en el periodismo político y económico. Por caso, en estos años los economistas profesionales del *staff* eran Juan Carlos de Pablo, Domingo Cavallo, Roque Fernández –entre otros–, quienes defendían posturas liberales.
3. En la medida en que los principales partidos se presentaron unidos, obtuvieron casi el 90% de los escrutinios, y el resto de las fuerzas políticas no alcanzó el 10% de los votos (Ferrari, Ricci y Suárez, 2013).
4. Agrupación política interna de la UCR fundada en 1972 por Raúl Alfonsín, la cual nucleó grupos radicales como la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada, cercanos a las tendencias socialdemócratas propias del alfonsinismo.
5. Reportaje a Bernardo Grinspun (Raúl Alfonsín). *Mercado*, 21 de abril de 1983, p. 3.
6. *Ibidem*.
7. Grinspun Ataca. Entrevista exclusiva con el ministro de Economía. *El Periodista de Buenos Aires*, diciembre de 1984, 13, p. 2.
8. *Ibidem*, p. 4.
9. Precisamente, si volvemos sobre el Gráfico 2, era el papel que tuvo el sector financiero en la

economía, su crecimiento en los años de dictadura, lo que llevaba a jerarquizarlo como un elemento importante para reducir la inflación. Esta cuestión podía considerar varios aspectos, pero, en el caso de Grinspun, fue relevante su entendimiento de que tenía algún aporte relevante a la inflación vía déficit cuasi fiscal (Grinspun, 1989). Por otro lado, también debe considerarse que era un tema de la agenda política de la época la crítica social amplia al sector financiero, que, por ejemplo, podía provenir de las moras en el sistema financiero en las clases medias (Wilks, 2023).

10. *Ídem.*

11. Se trata de una cuestión que contaba con la influencia contemporánea de Aldo Ferrer desde las filas de la Multipartidaria, pero también en aquellos años donde economistas que tendrían participación en el gobierno, como Mario Brodersohn –afiliado a la UCR–, Roberto Frenkel, Adolfo Canitrot, José Luis Machinea, Ricardo Carcioffi y los entonces jóvenes colaboradores Felisa Miceli y Horacio Rovelli participaban en reuniones en la Comisión de Economía de la Colegio de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas (CGCE) y el Instituto del Desarrollo Económico y Social (IDES), donde Ferrer tenía un lugar central. Luego, en 1983, el influyente economista publicó *Vivir con lo nuestro*, ejemplar que entregó a Alfonsín, y se desempeñó durante el gobierno como presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Rougier, 2022).

12. *Ibidem*, p. 6.

13. Partido surgido de la UCR en 1957 bajo el liderazgo de Arturo Frondizi y luego Alende, que desde 1972 continuó bajo el liderazgo del segundo como Partido Intransigente, y tendió a constituirse en una alternativa de centroizquierda entre la UCR y el PJ. En estos años, el PI tomaría una relevancia significativa como tercera fuerza política.

14. Reportaje a Aldo Ferrer. *Mercado*, 12 de julio de 1983, p. 2.

15. *Ídem.*

16. Consideró que se evidenciaba en los países centrales que las políticas ortodoxas mostraban cierta capacidad para bajar la tasa de inflación, pero a costa de un aumento del desempleo y un agravamiento de las tensiones sociales. En los países en desarrollo no hizo referencias específicas sobre este punto. Esta era una cuestión conflictiva en aquel entonces, y el debate en torno al enfoque de los planes ortodoxos del FMI y sus efectos sobre la macroeconomía contaba con críticas muy relevantes en el ámbito latinoamericano (Prebisch, 1982; Ground, 1984; Devlin, 1985; Meller, 1987). Incluso en Argentina se encontraba en desarrollo la discusión en torno al impacto negativo de las políticas de los programas de ajuste del FMI y sus eventuales beneficios en sectores ligados a la producción primaria y el capital financiero (Frenkel y O'Donnell, 1978). Sin embargo, debe ponderarse que este debate era reciente y que se encontraba en desarrollo en el campo académico, lo que puede explicar que en el ámbito político todavía no había condiciones claras para plantear una alternativa. En todo caso, una alternativa fue el Plan Austral de 1985, donde justamente Roberto Frenkel estuvo involucrado.

17. *Ibidem*, p. 3.

18. Como bregó una vez en funciones públicamente, debían limitarse los pagos a determinadas variables y emitir bonos de largo plazo por el resto. Propone Ferrer limitar los pagos. *La Nación*, 14 de mayo de 1984, p. 13.

19. Y que en sí mismo, si bien la misma fue relevante, lo que terminaría siendo más conflictivo a lo largo de la gestión democrática sería la problemática de la meta fiscal ante el FMI (Torre, 2021).

20. *Ídem.*

21. Luego de defender su tesis doctoral en 1943 “El impuesto a la tierra dentro del sistema impositivo argentino” (García Vázquez, 1943).

22. Y esto se materializó en el gobierno cuando bregó por una política monetaria dura donde primero se adecúen las expectativas inflacionarias a la baja y solo después plantear una reducción gradual de las tasas de interés, sugerencias contrapuestas a los planteos de Grinspun. Justamente, García Vázquez planteó que o los empresarios adecuaban sus expectativas a las pautas oficiales del gobierno, o el gobierno endurecía más la política monetaria. Economía apuesta a la carta monetaria. *Clarín*, 22 de diciembre de 1984, p. 2.

23. Reportaje a Enrique García Vázquez. *Mercado*, 8 de septiembre de 1983, p. 1.

24. *Ídem.*

25. *Ibidem*, p. 2. Dentro del gasto público en funcionamiento del Estado, Defensa y Seguridad era la mayor partida, con más de 3% del PIB en 1983, muy por encima de Administración general, con el 1,54%, y Justicia con 0,25%. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que del 12,8% del PIB que representaba el gasto público social consolidado en 1983, previsión social era el que mayores erogaciones representaba, con casi 4% del PIB, seguido de salud con 3,52 y educación con 2,78%. Secretaría de Programación Económica y Regional. Caracterización y evolución del gasto público social. Período 1980-1997. Dirección Nacional de Programación del Gasto Social, Buenos Aires, 1997, pp. 50-54.
26. *Ibidem*, p. 5.
27. Un debate que escaló una vez en el gobierno cuando García Vázquez se opuso a la propuesta de reforma de un sector del radicalismo de Grinspun, que proponía una reducción de representaciones gradual según tamaño de las entidades. Por ejemplo, en los extremos propuso que las entidades con 10 sucursales debían reducirlas un 10% y que de las entidades con más de 40 sucursales debían reducir sus representaciones en un 60%. La polémica financiera. *Clarín*, 23 de octubre de 1984, p. 18.
28. Un planteo que defendió desde su primer reportaje como presidente del BCRA, donde priorizó formular un sistema eficiente con menos entidades, tasas de interés nuestras e incentivos a la monetización de la economía. "Reportaje a García Vázquez" (13 de noviembre). *Clarín*, p. 18.
29. *Ibidem*, p. 6.
30. *Mercado*, 22 de septiembre de 1983, Reportaje a Vicente Lisardo Fernández, p. 1.
31. *Ídem*.
32. *Ibidem*, p. 3.
33. Reportaje a Jesús Rodríguez. *Mercado*, 13 de octubre de 1983, p. 1.
34. *Ídem*.
35. *Ídem*.
36. La cuestión de la concertación fue muy criticada por Juan De Pablo en las filas de *Mercado*. Como dio cuenta entonces, era un tema que estaba en la agenda de los partidos mayoritarios, aunque las definiciones en torno a qué tipo de concertación (partidaria, parlamentaria, sectorial, intra-Estado, entre otras) no eran claras. Juan Carlos de Pablo. Y dale con la concertación. *Mercado*, 21 de julio de 1983, p. 11.
37. *Ibidem*, p. 5.
38. La norma que regía entonces era la de la Ley 21382 de 1976 que suplantó a la Ley 20557, de carácter más restrictiva. La legislación vigente sentaba el principio de igualdad entre el inversor nacional y extranjero a partir de la imposición del mismo marco jurídico, lo que posibilitaba igual acceso al crédito interno y establecía las relaciones entre sociedades controlantes extranjeras y sus firmas locales como impediente. Esta ley mostraba su flexibilidad, además, al considerar como formas de aporte a la inversión en moneda extranjera, utilidades o capital en moneda nacional en condiciones de ser remesadas al exterior; capitalización de créditos externos, bienes materiales y de capital, nuevos o usados; la no restricción al inversor en sectores específicos; la autorización de repatriar capitales y dividendos en su totalidad a partir del tercer año de su ingreso al país. La norma habría permitido un aporte de capital extranjero y una reinversión de utilidades que duplicaron las cifras de los años setenta (FIEL, 1989: 69).
39. *Ibidem*, p. 2.
40. *Ídem*.
41. *Ibidem*, p. 4.
42. La capacidad ociosa medida por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) para la industria manufacturera era del 68% a mediados de 1983. Si bien venía subiendo, todavía se encontraba lejos del pico de casi 75% de 1980, alentada, según analizaban, por una tasa de interés negativa y el control a las importaciones post-Guerra de Malvinas. FIDE. *Indicadores de Coyuntura*, n°206, mayo de 1983, p. 103.
43. *Ibidem*, p. 6.
44. Se habrían pesificado los compromisos privados en moneda extranjera, lo que beneficiaría a firmas nacionales y extranjeras, muchas de las cuales tenían acceso a divisas o bien registraban deudas con

sus casas matrices que podían refinanciar. Uno de los acusados dentro del radicalismo fue Domingo Cavallo, que pasó por el BCRA en 1982, y a quien se le boicoteó sus intentos de acercamientos a Alfonsín (Cavallo, 1989: 25-30).

45. *Ibidem*, p. 7. Debate que, una vez en el gobierno el radicalismo, se materializó con un grupo de diputados radicales y peronistas que trabajaron intensamente en una Comisión Investigadora abocada a investigar ilícitos económicos durante la dictadura. Se trató de Guillermo Tello Rosas (UCR), Jorge Vanossi (UCR), Balbino Zubiri (UCR), Héctor Basualdo (PJ) y Julio César Araóz (PJ). Ver Informe y conclusiones de la Comisión Especial Investigadora. El caso Ítalo. Tomo I. Congreso de la Nación. Cámara de Diputados. Buenos Aires, 1985.

46. *Idem*, p. 6.

47. *Ibidem*, p. 4.

48. Desprestigiados en un arco relevante del liberalismo económico local, incluso en las filas de *Mercado*, economistas como Juan Carlos de Pablo y Carlos Rodríguez con frecuencia eran críticos. Por ejemplo, ver Roque Fernández, 14 de junio de 1984, Dirigismo incoherente, *Mercado*, 763, p. 23 y Juan Carlos de Pablo, 31 de marzo de 1983, Al liberalismo por resignación, *Mercado*, 701, p. 11.

49. *Mercado*, 27 de octubre de 1983, p. 3.

50. *Ibidem*, p. 6.

51. *Idem*.

52. Un caso relevante fue el debate por la permanencia de funcionarios de la dictadura en la planta mayor de la gerencia del BCRA. La no remoción de estos funcionarios habría impedido, según discutieron algunos testimonios, la generación de informes en torno a la investigación de la deuda externa durante la dictadura (Restivo y Rovelli, 2011: 69).

53. *Ibidem*, p. 7. El nivel de atraso de las tarifas era relevante, como puede verse en el Gráfico 7, y el nivel general se encontraba en términos corrientes en el mismo nivel de 1970.

Bibliografía

Arana, M. (2024). *Políticos, funcionarios y académicos. La formación universitaria de los economistas en Buenos Aires (1821-1966)*. Buenos Aires, Argentina: Lenguaje Claro.

Basualdo, E. y Kulfas, M. (2001). Fuga de capitales y endeudamiento externo en la Argentina. *Realidad Económica*, 173, 76-103.

Baeza Belda, J. (2017). Un asunto interno: la derrota del peronismo en las elecciones argentinas de 1983. *Derecho electoral*, 24, 153-166.

Belini, C. y Korol, J. C. (2021). *Historia económica de la Argentina en los siglos XX y XXI*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Belini, C. y Rodríguez, M. (2023). La democracia y el horizonte de la reactivación económica: expectativas y diagnósticos en los comicios de 1983. *PolHis*, 32(16), 44-74. <https://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/472>

Camarero, H. (2012). Claves para la lectura de un clásico. En M. Murmis y J. C. Portantiero (Dirs.), *Estudios sobre los orígenes del peronismo* (pp. 35-62). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Caravaca, J. y Espeche, X. (2021). La CEPAL en perspectiva: economía, posguerra y región en reuniones latinoamericanas (1942-1949). *Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 1(50), 53-62. <https://iberoamericana.se/articles/10.16993/iberoamericana.517>

Cavallo, D. (1989). *Economía en tiempos de crisis*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Sudamericana.

Devlin, R. (1985). Deuda externa y crisis: el ocaso de la gestión ortodoxa. *Revista de la CEPAL*, 27, 35-55.

Dvoskin, N. (2017). Historia de las ideas económicas. *Realidad Económica*, 46(310), 25-46.

Dvoskin, N.; Almeida, F.; Pia Paganelli, M. y Coujoumdjian, J. P. (2024). Articulaciones entre la historia económica y la historia del pensamiento económico. *Octavo Congreso Latinoamericano de Historia Económica (CLADHE VIII)*. Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 3-5 de diciembre de 2024, 20-21.

Ferrari, M.; Ricci, L. y Surárez, F. (2013). El peronismo y las elecciones bonaerenses. De la derrota a la consolidación en el gobierno provincial, 1983-1991. *Revista SAAP*, 7(1), 1961-190.

- Ferrer, A. (1983). *Vivir con lo nuestro*. Buenos Aires, Argentina: El Cid editor.
- Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas [FIEL] (1988). *Regulaciones y estancamiento. El caso argentino*. Buenos Aires, Argentina: Manantial.
- Frenkel, R. y O'Donnell, G. (1978). Los programas de estabilización convenidos con el FMI y sus impactos internos. *Estudios CEDES*, 1(1). <https://repositorio.cedes.org/handle/123456789/3453>
- Gambarotta, E. (2016). La multipartidaria y su división de lo político. Análisis del discurso de los partidos políticos en la transición a la democracia argentina. *POSTData*, 22(2), 629-653.
- Gerchunoff, P. y Llach, L. (1998). *El ciclo de la ilusión y el desencanto*. Buenos Aires, Argentina: Ariel.
- Gómez, T. (2020). *Los planes quinquenales del peronismo. Objetivos, prioridades y financiación*. Buenos Aires, Argentina: Lenguaje Claro.
- Grinspun, B. (1989). *La evolución de la economía argentina desde diciembre de 1983 hasta septiembre de 1989*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones radicales.
- Hall, P. (1986). *The Politics of States Intervention in Britain and France*. Oxford, Estados Unidos: Oxford University Press.
- Heredia, M. (2006). La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de Alfonsín. En A. Pucciarelli (Comp.), *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* (pp. 153-198). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Heymann, D. (1986). Inflación y políticas de estabilización. *Documento de Trabajo CEPAL*, 1-47. <https://repositorio.cepal.org/entities/publication/05c6da1a-b534-44bb-a357-f2cf4bce72ab>
- Meller, P. (1987). Revisión de los enfoques teóricos sobre ajuste externo y su relevancia para América Latina. *Revista de la CEPAL*, 32, 177-217.
- Neiburg, F. y Plotkin, M. (2003). Elites intelectuales y ciencias sociales en la Argentina de los años 60. El Instituto Torcuato di Tella y la Nueva Economía. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 1(14), 119-149. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9526315>
- Ground, R. (1984). Los programas ortodoxos de ajuste en América Latina: un examen crítico de las políticas del Fondo Monetario Internacional. *Revista de la CEPAL*, 23, 47-85.
- Odisio, J. y Rougier, M. (Eds.) (2022). *El desafío del desarrollo. Trayectorias de los grandes economistas latinoamericanos del siglo XX*. Rosario, Argentina: UNR Editora.
- Rapoport, M. (2020). *Historia económica y social argentina (1880-2003)*. Buenos Aires, Argentina: Crítica.
- Rougier, M. y Odisio, J. (2017). *La Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos. Las ideas sobre el desarrollo nacional (1914-1980)*. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
- Rougier, M. y Mason, C. (2020). *A las palabras se las lleva el viento, lo escrito queda. Revistas y economía durante el peronismo (1945-1955)*. Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.
- Perissinotto, R. (2021). *Ideas, burocracia e industrialización en Argentina y Brasil*. Buenos Aires, Argentina: Lenguaje Claro.
- Ravier, A. (2021). *Raíces del pensamiento económico argentino*. Buenos Aires, Argentina: Grupo Unión Argentina.
- Prebisch, R. (1982). Monetarismo, aperturismo y crisis ideológica. *Revista de la CEPAL*, 17, 143-161.
- Restivo, N. y Rovelli, H. (2011). *El accidente Grinspun. Un ministro desobediente*. Buenos Aires, Argentina: Capital Intelectual.
- Romero, J. L. (2005). *Las ideas políticas en Argentina*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Rougier, M. (2022). *El enigma del desarrollo argentino. Biografía de Aldo Ferrer*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Terán, O. (2010). *Historia de las ideas en la Argentina: diez lecciones iniciales (1810-1890)*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Schmidt, V. (2010). Talking Ideas and Discourse Seriously: Explaining Change through Discursive Institutionalism as the Fourth New Institutionalism. *European Political Science Review*, 2(1), 1-25.
- Torre, J. C. (2021). *Diario de una temporada en el quinto piso. Episodios de política económica en los años de Alfonsín*. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.

- Velázquez Ramírez, A. (2019). *La democracia como mandato. Radicalismo y peronismo en la transición argentina (1980-1987)*. Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.
- Wilkie, A. (2024). *Una historia de cómo nos endeudamos. Créditos, cuotas, intereses y otros fantasmas de la experiencia argentina*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
- Zanatta, L. (1996). *Del Estado liberal a la nación católica: Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo (1930-1943)*. Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

Recibido: 17/03/2025. Aceptado: 13/11/2025.

Ignacio Andrés Rossi, "La campaña de 1983: los economistas radicales y los debates de política económica para la democracia". Revista *Temas y Debates*. ISSN 1666-0714, año 29, número 50, julio-diciembre 2025, pp. 105-133.